

Traducción del artículo: "Colombia: Another 100 years of Solitude?"

Traducción de Luis Jesús Bautista.

Colombia: ¿Otros cien años de Soledad?

James A. Robinson.

"A pesar de todos los avances durante las dos anteriores presidencias, ninguna administración ha podido romper con el sistema fundamental de gobierno que originó los actuales problemas del país."

Hace una década Colombia estaba viviendo una terrible pesadilla. El país tenía la más alta tasa de homicidio en el mundo y era el centro de la industria del narcotráfico. El secuestro estaba disparado. Un buen número de líderes políticos habían sido asesinados y probablemente una tercera parte de los legisladores electos en 2.002 lo habían sido con la ayuda del paramilitarismo. Los actores armados distintos a las fuerzas del Estado –las guerrillas y los paramilitares- se estaban aproximando al 50% del tamaño del la Fuerza Pública estatal y la guerrilla estaba desarrollando un plan para cercar y tomarse la capital del país, Bogotá. La alta sociedad estaba viviendo en medio de un pánico tratando de sacar sus dineros fuera del país y solicitando visas de países extranjeros.

Las cosas cambiaron en 2.002 cuando Álvaro Uribe fue electo con la plataforma de "seguridad democrática". Uribe incrementó el tamaño de la Fuerzas Armadas de 203.000 efectivos en 2.002 a 283.000 una década después. El ejército pasó a depender menos de los conscriptos, aumentando la cifra de soldados profesionales de 59.000 a 87.000. Los gastos de

defensa se incrementaron en relación con el PIB en un 10%, pasando de un 3.7 a un 4%. Para soportar estos gastos, Uribe impuso a los ricos un “impuesto de seguridad democrática”, que resultó ser en promedio alrededor del 0.35% del PIB por año.

Una sostenida ofensiva militar sacó a las Fuerzas Revolucionaras de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero, de la mitad de los municipios que tenían bajo su control en 2.002 y condujo a la muerte de sus líderes, Raúl Reyes, Mono Jojoy y Alfonso Cano, mientras que su principal líder, Manuel Marulanda murió de causas naturales en el 2.006.

Una drástica caída en la tasa de homicidios y en el número de secuestros acompañó estos éxitos militares. En el 2.005, Uribe logró persuadir a alrededor de 30.000 miembros grupos paramilitares a su desmovilización y confesión de todos sus crímenes a cambio de sentencias reducidas.

A medida que mejoró la seguridad nacional, también mejoró la imagen internacional del país. Colombia ha pasado de ser un potencial estado fallido a unirse al grupo CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y África del Sur) un grupo de países dinámicos y emergentes dispuestos a jugar un papel destacado en el tablero mundial.

La inversión extranjera directa (IED) en los últimos 10 años ha crecido de 1.5 mil millones de dólares a 13 mil millones de dólares. La inversión ha crecido del 17% al 27% del PIB, indudablemente como respuesta a las mejores condiciones de seguridad y un mayor optimismo sobre el futuro. El ahorro, mientras tanto ha aumentado hasta aproximarse a un 18% del PIB. La deuda pública ha caído de cerca de 60% del PIB a un 43% hoy en día. Además, la tasa de crecimiento económico se ha acelerado: de un promedio del 3% anual en la década de los 90's,

creció a un promedio del 4.2% entre el 2.000 y el 2.011. Finalmente, en 2.011 el presidente de Estados Unidos, Barak Obama, firmó un tratado de Libre Comercio con Colombia.

Con base en éstos desarrollos, desde el momento en que el presidente Juan Manuel Santos asume la Presidencia en Agosto de 2.010, ha tratado de mantener la iniciativa militar y al mismo tiempo ha lanzado en un ambicioso intento para restaurar, de una vez por todas, inmensas cantidades de tierra a la gente que ha sido desposeída de alrededor de 5 millones de hectáreas durante el conflicto. Este programa de restitución de tierras, contenido en la Ley de Víctimas, comenzó a tener vigencia en Junio 10 de 2.011. Además, en Agosto de 2.012 el gobierno firmó con la guerrilla de las FARC un acuerdo base de seis páginas para desarrollar conversaciones en busca de la paz, negociaciones que se están desarrollando en la Habana, Cuba, mientras que escribo este artículo.

¿Ha Colombia finalmente dado la vuelta a la esquina y representará la paz con las FARC -y posiblemente con la otra guerrilla del ELN- los toques finales de su resurgimiento?

El primer paso para responder esta pregunta es considerar el origen de la violencia y el desorden en Colombia. Es muy tentador y común, atribuir estos problemas al narcotráfico, pero esto un error. El estatus del país como la capital mundial del narcotráfico refleja la previa organización disfuncional de la sociedad colombiana. También es muy tentador, y erróneo, culpar a las guerrillas sobre los problemas del país. Como la industria de las drogas, éstas son el resultado de problemas mucho más profundos.

Fundamentalmente, todos los problemas que Colombia tiene se derivan de la forma como ha sido gobernada. La mejor forma de definir esto es que se trata de un gobierno indirecto, común

en los imperios coloniales Europeos, en el cuál las élites políticas nacionales que residen en las áreas urbanas, particularmente Bogotá, han delegado efectivamente el funcionamiento de las zonas rurales y otras áreas periféricas a las élites locales. A éstas élites locales se les ha dado libertad para gobernar como ellos deseen e incluso se les ha permitido tener representación en el Congreso, a cambio de dar soporte político y de no desafiar a las élites nacionales.

Es esta forma de gobierno en la periferia lo que ha creado el caos y la ilegalidad que ha aquejado a Colombia. Narcotráfico, mafias, secuestradores, guerrillas izquierdistas y paramilitares de “derecha” han ciertamente exacerbado los problemas del país, pero todos los problemas tienen su origen en la manera como se gobierna el país. Como bien lo afirmó el escritor colombiano R.H. Moreno: “En Colombia, la política corrompió el narcotráfico”.

Las Columnas que sostienen el sistema.

Este sistema, tal como es, genera preguntas obvias. La primera es, ¿cuáles son los intereses que lo mantienen en su lugar? Segunda, ¿cómo es que este sistema que genera tal desorden en la periferia puede ser estable? Tercera, ¿por qué las élites locales encuentran favorable para sus intereses tener una sociedad caótica?

Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta definitiva, pero algunos de los mecanismos en juego resultan ser claros. Primero, es fácil de ver algunos de los intereses involucrados en el sistema. La confusión en la Colombia periférica disminuye el precio de los votos. En lugar de tener que desarrollar programas y ganar apoyo ofreciendo políticas públicas o favores particulares, los políticos consiguen ser elegidos ganándose el apoyo de los jefes locales o quizás convirtiéndose ellos mismos en jefes.

Consideremos a ex-senador Fabio Valencia Cossio, quien en 1.998 logró la segunda votación más alta votada por un senador, superado sólo por la votación de Ingrid Betancourt quien fuera posteriormente candidata presidencial y luego víctima de un largo secuestro. Valencia Cossio, fue posteriormente Ministro del Interior bajo el gobierno de Uribe, supo exactamente cómo “apilar” votos como lo sugirió Ramón Isaza el líder de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio cuya ayuda él solicitó en elecciones “ganadoras”. Entonces, una explicación para la durabilidad del caos en la periferia es que, facilitando acuerdos como el que Valencia Cossio trató de hacer con Isaza, el sistema hace mucho más económico para las élites la consecución de votos. Las élites en todo caso ven muy costoso construir capacidad estatal en las áreas rurales y prefieren éste tipo de pactos.

Un segundo mecanismo que muestra los intereses en juego es que este sistema hace que la democracia en Colombia sea muy “amigable” para las élites. Una consabida tesis a cerca del origen de la democracia es que es un resultado de un compromiso o concesiones que hacen las élites al pueblo para evitar el desorden o incluso una rebelión. En un sistema no-democrático, la gente privada de derechos puede causar problemas o puede rebelarse porque no tienen voz ni voto en la definición de las políticas. Tal rebelión es muy costosa para las élites, entonces la elite crea la democracia como una forma de incluir al pueblo dentro del sistema, escapando del caos social.

Sin embargo, éste no es un buen modelo para explicar los orígenes de la democracia Colombiana. En éste caso, las élites no se vieron amenazadas por las masas. En su lugar, como el investigador Eduardo Posada-Carbó ha demostrado, las instituciones políticas democráticas han proveído un mecanismo en el cual las élites comparten el poder, de tal forma que entre ellas

evitan las luchas internas. Una versión temprana de esto fue lo que se llamó el “voto incompleto” después de un conflicto interpartidista conocido como la Guerra de los Mil Días, entre 1.899 y 1.902. Este sistema, que Sebastián Mazzuca y yo hemos estudiado, le daba dos terceras partes de las sillas legislativas a los conservadores, el partido dominante de la época, y garantizó un tercera parte a los liberales (el partido rival), sin importar cuantos votos hubiesen alcanzado, para tenerlos contentos. El sistema se vino abajo en 1.930. Sin embargo, en 1.958 después de otra sangrienta guerra civil, un pacto inter-partidista denominado Frente Nacional, terminó en un arreglo parecido, excepto que ésta vez los partidos compartieron todo en un 50-50.

Esos acuerdos y su persistencia revelan uno de los hechos más destacados de la política Colombiana, el cual es la larga vida de los partidos políticos colombianos, los cuales nacieron en el siglo XIX y permanecieron vigentes durante el siglo XX, un fenómeno único en Latino-América. Pero para mantenerse en la cima de la política con diferentes esquemas que cartelizaron la política, una cosa fue crítica: la entrada de nuevos partidos políticos se tenía que evitar. Esto fue conseguido por varios métodos, incluyendo la forma del sistema electoral.

Pero otro factor obvio que contribuyó fue la facilidad con que se podía erradicar a las nuevas fuerzas políticas, por medio de la muerte o de la violencia. En la década de los 80's cerca de 2000 miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados, incluyendo dos de sus candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa. Carlos Pizarro, el candidato de la desmovilizada guerrilla del M-19 en 1.990, fue también asesinado. Y la muerte de políticos no comenzó en ese entonces, pues se remonta al asesinato de líderes liberales radicales como Jorge Eliécer Gaitán en 1.948 y Rafael Uribe Uribe en 1.914. Entonces, el caos en la periferia facilitó la

persistencia de la democracia oligarca y cartelizada que los partidos tradicionales crearon en el siglo XIX.

Otro mecanismo que revela los intereses que sostienen el sistema de gobierno en Colombia y que lo perpetúan es que el conflicto permanente en las áreas rurales garantiza que la periferia no sea capaz de cooperar con el centro. Una teoría común en los estudios de política africana es que el centro fomenta el caos en la periferia con el fin de “dividir y vencer”. Sudán y Congo son los casos clásicos y esta idea ciertamente es aplicable en Colombia. Consideremos el caso de Rodrigo García Caicedo, un ganadero y líder cívico del departamento de Córdoba quien estuvo activamente involucrado en la creación de grupos paramilitares. En 1990 le comentó a un líder del antiguo grupo rebelde M-19: *“Estoy seguro de que si las guerrillas hubiesen hablado con nosotros, en lugar de atacarnos, nosotros hubiésemos tenido una guerra, no entre nosotros. Nos habríamos organizado y levantado conjuntamente contra el Estado central”*.

Otro jefe paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo (alias “Jorge 40”), estaba escribiendo su autobiografía antes de que fuera extraditado a los Estados Unidos en 2008, recordaba: *“las grandes desigualdades del país y la falta de compromiso de los pocos poseedores del poder para trabajar por el bienestar de las grandes mayorías sociales del país”*. Por “poseedores del poder”, Jorge 40 se estaba refiriendo a aquellos que estaban en el gobierno nacional en Bogotá.

Ética Circunstancial

La segunda pregunta - ¿cómo puede un sistema que crea tal desorden permanecer estable? - es todavía más difícil. El último conjunto de argumentos sugiere que podría no estar en los intereses de aquellos que se benefician del sistema que el país se convirtiera en algo parecido a

un país del sub-Sahara africano, con poca riqueza para cada uno. Pero, ¿cómo podría detenerse esto?

Yo pienso es que el núcleo y la periferia han evolucionado a un equilibrio estable en donde todos los actores se comportan diferente, dependiendo del contexto. Ésta es la manera como el antropólogo-político Edward Banfield describe las raíces de la pobreza en el sur de Italia. Banfield demostró que la gente aplica diferentes criterios de comportamiento en diferentes contextos: uno al interior de la familia y otro cuando se relaciona con alguien distinto. A pesar de que el escenario relevante en Colombia no necesariamente es la familia, muchos ejemplos sugieren que los colombianos aplican una moralidad generalizada o limitada dependiendo del contexto. El resultado neto es tener un sistema estable.

Dos ejemplos ilustran este fenómeno. El primero está relacionado con uno de los asuntos más relevantes en la Colombia actual: la compensación para aproximadamente 4 millones de personas que han sido desplazadas de las áreas rurales en los 15 últimos años de conflicto. El capítulo 3 de la Ley de Víctimas establece la restitución de tierras a aquellos campesinos que fueron desposeídos en los últimas dos décadas. En el Senado Colombiano, uno de los principales proponentes de ésta Ley fue el senador Juan Fernando Cristo, político del departamento de Norte de Santander. Sin embargo, en las elecciones locales del 2011, él apoyó la campaña electoral a la alcaldía de Cúcuta a su hermano Andrés en alianza con un poderoso político local y ex -alcalde de la ciudad, Ramiro Suárez Suárez quien fue arrestado en Agosto 12 de 2011 por su reconocida alianza con los paramilitares responsables de asesinatos y múltiples crímenes en el departamento. Una corte local lo sentenció a 27 años de cárcel por el asesinato de un asesor legal

local. Cuando Cristo fue confrontado por un periodista por su contradicción, el senador simplemente dijo: “la política local opera con una lógica diferente.”

Un segundo ejemplo muy dicente es la carrera del Congresista Víctor Renán Barco. Barco formó parte de lo que se denominó “la coalición” que gobernó el departamento de Caldas en los últimos 30 años, hasta su retiro de la política en 2.009, un poco antes de su muerte. En Bogotá, Barco era visto con la revista *The Economist* bajo su brazo. Además tenía una columna en el periódico de negocios llamado Portafolio. Era conocido como la “Némesis del Ministro de Hacienda” por su indeclinable defensa de una política macroeconómica fiscal prudente. Pero volviendo a Caldas, en su base la ciudad de La Dorada, Barco tenía la reputación de dirigir una de las más severas e intransigentes maquinarias clientelistas de compra de votos del país, una maquinaria que no toleraría ninguna crítica ni oposición. El destino de quienes investigaban esta maquinaria, tal como sucedió con el periodista de *La Patria*, Orlando Sierra era típicamente un balazo en la cabeza.

Estos ejemplos muestran que en diferentes contextos los políticos Colombianos aplican diferentes estándares y reglas e comportamiento. Algunas veces, cuando para la nación evocan una política económica responsable o la Ley de Víctimas, ellos recurren a leyes universales. En otros momentos, en el momento de hacer política en la periferia, aplican unos estándares mucho más locales. Que la gente se comporte de esta forma y se hayan acostumbrado a hacerlo es en gran parte de las razones por las cuáles el sistema se reproduce así mismo sin un gran proyecto.

Élites Para No Confiar

La tercera pregunta -¿por qué las élites de la periferia encuentran favorable a sus intereses ese estado caótico de sociedad?- también es difícil de responder.

Se podría pensar que las élites locales tienen poca motivación para provocar el conflicto y tendrían un mejor futuro económico con estabilidad. Tomemos el caso del Senador Álvaro Alfonso García Romero, quien está pagando 60 años de prisión por sus nexos con el paramilitarismo y por haber sido el autor intelectual de la masacre de Macayepo en 2.000, en la cual 15 campesinos fueron golpeados hasta la muerte. Él es un excelente ejemplo de una elite terrateniente local cuya familia tenía extensas propiedades de tierra y que también tenía importantes intereses en el cultivo del tabaco y otros productos agrícolas. ¿Por qué resultó involucrado en masacres?

La mejor manera de pensar esto es como parte de un equilibrio que no siempre sirve a las élites regionales que son dominantes en un determinado momento. El punto clave es que hay una gran rotación de elites. En Bolívar, por ejemplo, el Senador que en la actualidad recibe la mayor cantidad de votos se llama Héctor Julio Alfonso López, apodado El Gatico. Su sobrenombre proviene de su madre, Enilse López, conocida como La Gata, quien durante la pasada década ha tenido el monopolio del manejo del juego de azar denominado chance en los departamentos de la Costa Caribe. El hermano de Héctor Julio, Jorge Luis está en prisión bajo investigación de algunas irregularidades, incluyendo asesinatos cuando se desempeñaba como alcalde de la ciudad de Magangué, lugar donde La Gata tiene su resguardo. La Gata, quien supuestamente fue compañera sentimental de Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los fundadores

del cartel de Medellín en la década de los 70, consiguió poder bajo la sombra de los paramilitares. Está acusada de haberse involucrado en muchas masacres tales como la de El Salado en departamento de Sucre, en el año 2.000, en la cual los paramilitares asesinaron unas 60 personas.

La Gata y El Gatico no son élites tradicionales de cualquier forma imaginable. Son pertenecientes a una élite local nueva y emergente que han llegado allí gracias a su habilidad para manejar y beneficiarse de los conflictos de la Colombia rural. A pesar de que el sistema tiene una destacada capacidad para absorber esta gente, esto no implica que se generen buenas instituciones en el área rural. Una rotación rápida en las élites tiende a crear incentivos de depredación, fomenta derechos de propiedad débiles y desincentiva la inversión. Las nuevas élites sacan provecho de las anteriores y a su vez, éstas sacaron ventaja de las iniciales. Un factor complementario es que pocos colombianos tienen derechos de propiedad garantizados y mucha tierra ha sido adquirida de manera ilegal, haciendo así difícil legalizar cualquier statu-quo en la propiedad.

Es fácil pensar en los jefes paramilitares como Jorge 40 como gánsteres y mafiosos - como muchos de ellos lo fueron y lo son-. Pero pensar de ellos sólo de ésta manera es malinterpretar el fenómeno. En alrededor de un tercio a un medio de la Colombia rural ellos son el Estado y pueden hacer lo que ellos quieran. Los Colombianos llamaban a Jorge 40 el "Papa Tovar" y desde su "Vaticano" en las planicies de San Ángel, a orillas del río Magdalena él dirigía su pequeño imperio de 20 frentes armados en tres departamentos. Su autoridad en la región de la costa Caribe era tal que los campesinos cuya tierra fue robada por sus hombres le enviaban peticiones como si él fuera el gobernador oficial. *"Con el debido respeto, me dirijo a usted para que*

autorice a quien corresponda que me sean devueltas las tierras en la municipalidad de San Ángel....yo fui desalojada de esta tierra hace 4 años y mi familia depende de esta tierra para su supervivencia. Hoy nosotros vagamos de ciudad en ciudad para ganarnos la vida”, escribió una mujer cuya carta fue hallada por la policía en la sede que Jorge 40 tenía en el departamento del Cesar. Jorge 40 era el Estado.

Otros grupos fueron igualmente dominantes. La capital de Ramón Isaza fue Puerto Triunfo, al oriente del departamento de Antioquia, allí fue donde él comenzó su primer grupo paramilitar, denominado “Los Escopeteros”, en 1.997. Isaza controló esa área por casi 30 años. Uno de sus comandantes clave fue su yerno, Luis Eduardo Zuluaga (apodado MacGyver – McGuiver en Colombia – en relación con un personaje de una serie de televisión en Estados Unidos). McGuiver fue el comandante del frente José Luis Zuluaga (FJLZ), que controló un territorio aproximado de 5.000 kilómetros cuadrados.

El FJLZ tenía un sistema legal de estatutos escritos (aunque muy incompletos) que trataron de imponer (de forma imperfecta). Esto permitía una rudimentaria igualdad ante la ley en el sentido de que las mismas leyes se aplicaban a los miembros del FJLZ como a los civiles. Este frente también tenía una organización burocrática con especializaciones funcionales entre el área militar, “civiles” que recogían impuestos y un “equipo social”, el cual se comportó aparentemente de forma no clientelista. El FJLZ regulaba el comercio y la vida social. Tenía una misión, una ideología, una oración, un himno y una estación radial. Tenían condecoraciones, incluyendo la “Orden de Francisco de Paula Santander” y la “Gran Cruz de Oro”. El FJLZ gravaba con impuestos a los finqueros y a los negociantes de la zona. También gravaba a los traficantes de droga y a los laboratorios de droga, aunque no estaba involucrado en este negocio

(de hecho, desaprobaba de este). Construyeron centenares de kilómetros en caminos y extendieron la energía eléctrica a las áreas rurales. Construyeron escuelas y pagaron profesores en algunas partes e instrumentos musicales en otras. Iniciaron la construcción de una clínica, reconstruyeron un hogar para ancianos, construyeron casas para la gente pobre, crearon un centro para artesanos, un estadio deportivo y una plaza de toros.

Todo esto es quizás mejor resumido de manera irónica por el jefe paramilitar Ernesto Báez, cuando le pregunta a un juez en Bogotá: “¿Cómo fue posible que un pequeño estado independiente funcionara dentro de un estado con leyes como el nuestro?”, si usted quiere entender Colombia, usted necesita entender esta pregunta.

Carteles Políticos

La complejidad de este sistema es tal que no se mantiene en su lugar con un gran pacto Faustiano o un cálculo Maquiavélico, ha evolucionado por un largo período de tiempo. Hay considerable evidencia para su duración. Tomemos la carrera de Dumar Aljure, quien fue un desertor del ejército y miembro de la guerrilla liberal durante la guerra civil conocida como “La Violencia” en la década de los 50’s; él gobernó una “república independiente” en los llanos orientales, en el departamento del Meta durante 15 años hasta cuando el ejército lo mató en 1.968. Desde su “capital” en San Martín, Aljure cobraba impuestos y regulaba el comercio y la sociedad, así como hacían Jorge 40 o Isaza. Más importante, él se convirtió en un cacique que entregaba votos para los políticos locales en Villavicencio a cambio de que no se metieran con él o en su territorio. Su error fue intentar de cambiar de bando en las elecciones de 1968. Él apoyó al candidato perdedor y el ganador permitió que las fuerzas armadas fueran por él.

El sistema de gobierno en Colombia genera otro fenómeno que tiende a reproducirlo. Uno es el alto grado de monopolio que tiene la economía. La gente rica en Colombia en muchas ocasiones hace su riqueza a partir de monopolios que son protegidos y a veces blindados por el gobierno y reforzada con comportamientos predadores e incluso violentos. Los hombres más ricos de Colombia han monopolizado diferentes sectores de la industria –Carlos Ardila Lulle bebidas gaseosas y azúcar; Luis Carlos Sarmiento banca y servicios financieros; Julio Mario Santo Domingo la cerveza. Tal cartelización se forma fácilmente de un sistema político que carece de responsabilidad social. Y se extiende en los sectores de productivos hasta a los de distribución, donde por ejemplo “El Cebollero” apodo de Alirio de Jesús Rendón utilizó la violencia para establecer un monopolio en el comercio doméstico de cebollas. Esta estructura económica crea grandes diferencias entre el precio interno y el precio del mismo producto en países vecinos, lo cual induce a un vasto flujo de contrabando de productos a lo largo de las diferentes fronteras de Colombia con sus vecinos. De hecho, el famoso capo de las drogas Pablo Escobar comenzó su carrera criminal contrabandeando cigarros y otros bienes de consumo antes de pasarse a la cocaína. Es así como el sistema de gobierno crea ventajas comparativas para la criminalidad, quizás el factor principal que convirtió a Colombia en un centro global para el narcotráfico

Pasos de bebé.

A pesar de esta historia, la nación aparentemente ha cambiado en la década pasada. ¿Es esta una nueva Colombia? Quizás. Ciertamente, muchos creen que es así. Sin embargo, signos generales y la lógica de mi argumento sugieren lo contrario. Hay muchas razones para sustentar esto pero la más importante es que, a pesar de los avances obtenidos en los dos períodos

presidenciales, ninguna administración ha podido romper con el sistema fundamental de gobierno que originó los actuales problemas del país.

La naturaleza de un sistema de gobierno que no se ha cambiado ha salido a flote varias veces en la década pasada. El Presidente Uribe gastó grandes cantidades de tiempo y de capital político tratando de cambiar la constitución, de tal modo que él pudo reelegirse por un período y permanecer en el poder. Fue exitoso una vez (con los políticos elegidos en gran parte con el apoyo de los paramilitares en el 2.002), pero falló en su segundo intento.

Otro indicativo de la ausencia de cambio es el escándalo de las “chuzadas”, en el cual Uribe utilizó al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la versión colombiana de la CIA, para grabar ilegalmente los teléfonos de un buen número de políticos opositores y de cualquiera que criticara la administración, incluyendo el director local de Human Rights Watch. El gobierno también “chuzó” los teléfonos de Corte Suprema de Justicia, con el objeto de hallar evidencias que pudieran comprometer a sus miembros.

Más aún, la Ley de Víctimas, la política más emblemática del Presidente Santos para cambiar el país es ampliamente considerada en Colombia como una Ley simbólica y básicamente imposible de implementar. En Septiembre de 2.010 el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo visitó Necoclí en la región de Urabá al norte del departamento de Antioquia. Estuvo allí para comenzar el proceso de restitución de tierras. El mismo día uno de los cinco líderes campesinos que había promovido la campaña por la justicia, Hernando Pérez, fue golpeado hasta la muerte. En la escena del crimen fueron dejadas cuatro balas sin usar: una para cada uno de los otros líderes. El sexto, Albeiro Valdés, había sido asesinado cuatro meses antes.

Se puede hacer una comparación interesante con el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, quien entre 1.966 y 1.970 lanzó un ambicioso programa de reforma agraria. Lleras Restrepo, probablemente el más competente presidente colombiano del siglo pasado, tenía unas capacidades técnicas impresionantes y trabajó la reforma en un ambiente de cooperación internacional, en el contexto de la Alianza para el Progreso lanzada por el presidente John F. Kennedy. Aún así, la reforma agraria falló, en gran parte porque Lleras no pudo lograr el apoyo de las élites locales.

En Octubre de 2.012 el diario local *El Espectador* publicó una serie de artículos haciendo referencia a que en la región noroccidental de Urabá hasta esa fecha, no se había comenzado el proceso de restitución de tierras. El diario citaba las palabras de un campesino local: “*es más fácil sostener el océano con un dedo que retornen esas tierras a sus legítimos dueños*”. La misma serie demostró que, mientras los paramilitares se desmovilizaron en 2.006 y sus principales cabecillas están en prisión, su número actual en el terreno se ha duplicado. Líderes como El Alemán ejercen un efectivo control de esa zona desde la cárcel.

Es cierto que la violencia en Colombia ha disminuido y ahora hay, por primera vez, una estación de policía en La Danta, algo que McGuiver había insistido antes de su desmovilización. Pero a pesar de esos innegables avances, la gente rica del país más desigual de América Latina permanece reacia a pagar por muchos de los bienes públicos. Cuando el gobierno de Uribe lanzó su programa bandera, el Plan Nacional de Consolidación en 2.008, para establecer la presencia del Estado en áreas que las FARC siempre habían dominado, fue necesario que 237 millones de dólares fueron entregados por la agencia americana para el Desarrollo USAID. Las élites colombianas, acostumbradas a su política de gobierno indirecto, tienen muy poco interés en

financiar los esfuerzos para establecer el orden en el país rural. Y esto no es porque tengan una tributación alta: mientras que el 10% de los colombianos más pobres pagan el 8% de sus ingresos en impuestos, el 10% más rico paga solamente un 3%.

La violencia continúa siendo una parte notable y a la vez normal de la vida en Colombia. En las elecciones locales de Octubre de 2.011, 41 candidatos fueron asesinados -la punta del iceberg de las intimidaciones y amenazas-. De acuerdo con la Confederación Internacional de Trabajadores, de 76 líderes sindicales asesinados en 2.011, 29 fueron asesinados en Colombia. En Octubre de 2.012 el Secretario de transporte de la ciudad de Cali, Alberto Hadad, tuvo que salir del país por amenazas de muerte. Su "crimen" fue proponer la construcción de un sistema integrado de transporte para la ciudad, lo cual podría haber socavado las ganancias que reciben los operadores privados de buses de transporte.

No es tiempo de euforia.

Todo esto implica que si las FARC y posiblemente el ELN deciden desmovilizarse, a pesar de que esto sea un gran avance, los problemas del país están lejos de solucionarse. Así como la economía de la droga, la insurgencia izquierdista de Colombia es el resultado de un estilo de gobierno indirecto que engendra violencia e ilegalidad en la periferia. En efecto, la desmovilización de los paramilitares en 2.006 llevó a la proliferación de nuevos grupos armados, por ejemplo "Los Urabeños" y "Los Rastrojos", el primero de los cuales demostró su poder en Enero de 2.012 cuando impuso un paro armado de dos días a lo largo de los departamentos de la costa caribe, obligando a muchos negocios a cerrar por 48 horas. La desmovilización de las FARC podría tener efectos similares.

La construcción de una Colombia diferente implica luchar contra la manera básica como el país ha sido gobernado desde su inicio como una República independiente en 1.819. El Plan Nacional de Consolidación del Uribe representó un pequeño paso hacia ese objetivo, pero por muy bueno que fue, su estructura no reconocía suficientemente la incapacidad política del Estado colombiano en la periferia. Desafortunadamente, en lugar de estimular e intensificar una reforma agraria y los esfuerzos por la construcción de un estado fuerte, la paz con las FARC parece conducir a una euforia tal que esas transformaciones sean olvidadas o canceladas - precisamente el camino incorrecto-.